

Ejecución de Títulos Judiciales: 27/2017 (PO 81/2012)

Demandante: Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

Demandado: Ayuntamiento de Meco

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID

D. FERNANDO ANAYA GARCÍA, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre del **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE**, según tengo acreditado suficientemente en los Autos arriba referenciados, y asistido por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, **DON CARLOS PEÑA RECH**, ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que mediante el presente escrito, al amparo de lo establecido en los **artículos 103.4 y 5, y el artículo 109 de la LJCA** procedemos a promover **INCIDENTE DE EJECUCIÓN** solicitando la declaración de nulidad del **Decreto nº 1269/2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Meco de fecha 8 de agosto de 2017**, por considerar que dicha resolución administrativa es contraria a derecho e infringe el contenido de la sentencia dictada **Sentencia nº 198/2016 de 9 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid**, conforme se acredita en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que tal y como le consta al Juzgado al que nos dirigimos, esta parte en fecha 19 de junio de 2017, instó la ejecución forzosa de la **sentencia nº 198/2016** de 9 de marzo de 2016. dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que contenía el siguiente FALLO:

ESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torres, representado por el Procurador D. Fernando Anaya García contra la sentencia de 24 de febrero de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, en los autos de procedimiento ordinario 81/2012, sentencia que revocamos. Y

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torres contra “la vía de hecho realizada por el citado Ayuntamiento de Meco, respecto al cierre al tráfico rodado del denominado Camino de Villanueva de la Torre a Meco que comunica ambas poblaciones y frente a la inactividad de dicha administración en orden a la reapertura del tráfico rodado del citado camino compartido por ambos Municipios” y declaramos la nulidad de la vía de hecho impugnada por ausencia del procedimiento legalmente establecido, condenando al Ayuntamiento demandado a la reapertura al tráfico rodado del citado camino en las circunstancias previas existentes a la actuación impugnada.

Todo ello sin expresa condena en costas de la apelación y de la instancia.

De conformidad con el citado fallo judicial, esta parte solicitaba que por el Ayuntamiento de Meco se procediera a la reapertura al tráfico rodado del citado camino en las circunstancias previas existentes a la actuación impugnada.

SEGUNDO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 26 de junio 2017, por el Juzgado al que nos dirigimos se procedió a requerir al Ayuntamiento de Meco para que informase por escrito al Tribunal de las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el Fallo.

En respuesta de dicho requerimiento y mediante escrito de fecha 20 de julio de 2017 el Ayuntamiento de Meco presentó escrito señalando *textualmente* lo siguiente:

Que dentro del plazo concedido procede a contestar el citado requerimiento, señalando que:

- I. Todos los obstáculos que impedían la circulación fueron completamente retirados.
- II. A día de hoy no hay ningún new jersey, socavón, zanja u obstáculo que impida la circulación.
- III. El camino no se encuentra por tanto cortado, y a día de hoy está garantizada la circulación por el mismo dentro, claro está, de las limitaciones que suponen el poder circular por un camino rural que, en ningún caso, tiene ni puede tener las características de una carretera
- IV. La reapertura al tráfico rodado del citado camino se encuentra exactamente en las mismas circunstancias previas existentes a la actuación impugnada.

Por último se quiere recordar la textualidad del Fallo del TSJ de Madrid, que viene a señalar de forma incontestable ***“que el camino en cuestión es un camino rural y no una carretera y que es competencia del Ayuntamiento de Meco regular los usos de los caminos rurales de su municipio, aunque se precisaba que esa regulación debe hacerse respetando los principios de procedimiento”***.

Es decir, que una vez retirados los obstáculos que impedían la libre circulación, en ningún caso se puede pretender que dicha circulación por un camino rural, tenga las condiciones de seguridad, señalización, iluminación, etc., con las que cuentan las carreteras, y por tanto no puede haber la menor duda sobre el perfecto y completo cumplimiento del Fallo incluido en la Sentencia del TSJ de Madrid.

TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 24 de julio se nos dio traslado del citado escrito para alegaciones.

Alegaciones que fueron realizadas mediante escrito de fecha 28 de julio de 2017, acompañado de un informe técnico en el que se acreditaba que el Ayuntamiento de meco no había repuesto el Camino a la situación previa a la actuación impugnada y se solicitaba la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia.

CUARTO.- Así las cosas y pendientes de la decisión del Juzgado sobre si se había producido o no la correcta ejecución de la sentencia, esto es, si se había producido la reapertura al tráfico del Camino en las circunstancias previas a las actuaciones impugnadas, el Ayuntamiento de Meco de manera sorpresiva y en pleno mes de agosto, procede a dictar el **Decreto 1269/2017 de 8 de agosto**, con el siguiente tenor literal:

PRIMERO: Aprobar la ejecución de los trabajos que sean necesarios (instalación de obstáculos, levantamiento del asfalto,...) para restringir el tráfico rodado en el camino rural de los vehículos que no deben circular por él. Trabajos que comenzarán el 28 de agosto de 2017 y que deben impedir el uso inapropiado pero garantizar las necesidades de entrada y salida a las fincas a las que da acceso.

SEGUNDO: Dentro del principio de lealtad institucional y cooperación interadministrativa que rigen entre las Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, póngase a dichos efectos en conocimiento del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos legales oportunos.-

En Meco, en la fecha que consta en la huella de firma digital impresa al margen del documento

El Alcalde. D. Pedro Luis Sanz Carlavilla

(firmado digitalmente)

Se acompaña el citado Decreto, que es objeto de específica impugnación mediante el presente incidente como **DOCUMENTO Nº 1**.

QUINTO.- Conforme a nuevo informe técnico solicitado que se acompaña al presente como **DOCUMENTO Nº 2**, las obras ejecutadas al amparo del citado Decreto de fecha 8 de agosto de 2017 han sido, hasta la fecha, las siguientes:

- Instalación, en varios puntos del camino, de elementos de hormigón impidiendo el paso de todo tipo de vehículos, incluidos los vehículos agrícolas a 50 metros y a 300 metros dirección Meco
- Instalación de un badén de 50 cm de altura, a 40 metros dirección Meco conformado por una banda de hormigón armado con varillas metálicas. Este obstáculo imposibilita el tránsito de vehículos turismos.
- Corte del asfalto y practicado una zanja en la margen derecha del camino A unos 300 metros dirección Meco.

Como puede apreciarse, dichas nuevas obras realizadas en agosto, unidas a las previamente ejecutadas y que nunca han sido repuestas a su situación previa, **no sólo dificultan sino que impiden el acceso rodado a todo tipo de vehículos** (ya sean privados o agrícolas) y, por supuesto, impide la ejecución de la sentencia dictada en sus propios términos.

Por otro lado y respecto a los **aspectos formales** tanto de la nueva resolución dictada como del procedimiento seguido, debe indicarse que la citada resolución,

vuelve a incurrir en los mismos vicios de nulidad de las previas actuaciones administrativas ya declarados por la propia sentencia dictada por el TSJM (ver FD Tercero) y es que de nuevo **el Ayuntamiento de Meco ha vuelto a dictar la nueva resolución, por la vía de los hechos consumados, sin previa audiencia del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y además sin indicación concreta - sino vaga y genérica- de las obras que se están autorizando**, resultando que las mismas vuelven de nuevo a impedir completamente el tráfico de todo tipo de vehículos.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se invocan los **artículos 103.4 y 5 y 109 de la LJCA**, que disponen lo siguiente:

Art. 103

4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 109

1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:

- a. Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.*
- b. Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran.*
- c. Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.*

2. Del escrito planteando la cuestión incidental el Secretario judicial dará traslado a las partes para que, en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión planteada.

Conforme a los citados preceptos corresponde al Juzgado al que nos dirigimos, pronunciarse sobre cuantas cuestiones sean sometidas a su consideración y se plateen en ejecución de la sentencia dictada, puesto que el Tribunal al que nos dirigimos sería igualmente el competente para declarar su nulidad si se solicitara la misma a través de la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el referido acto o disposición, cumpliéndose así con lo preceptuado en el último inciso del artículo 103.5 de la LJCA.

El Tribunal Supremo ha sido claro al afirmar que «la ejecución de sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula del Estado Social y democrático de Derecho, que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no solo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado, según se desprende del artículo 117.3 CE. A ello obedece que el Tribunal Constitucional reiteradamente haya declarado que la ejecución de las sentencias constituya no sólo parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 CE reconoce, sino también un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico» **(STC 167/87, de 28 de octubre)**.

El propio Tribunal Constitucional en su sentencia nº 67/1984 ha señalado que “la ejecución de las sentencias en sus propios términos forma parte de la tutela judicial efectiva, que queda en entredicho en los supuestos en que se produzca “desobediencia disimulada” de la Administración (STC 167/1987 Y 148/1999), y que “la Administración está obligada a ejecutar las sentencias, pero que al hacerlo el órgano administrativo no está ejerciendo, en realidad, una potestad administrativa propia, sino concretando el deber de cumplir los fallos judiciales y colaborando con los tribunales,

debiendo el Tribunal cuando se incumple tal obligación adoptar sin dilación las medidas que considere procedentes porque es él quien constitucionalmente le corresponde ejecutar lo juzgado (STC 67/1984), pudiendo requerir la colaboración que estime precisa de otros entes públicos (...).".

La sentencia del TS de 17 de septiembre de 2010 (RJ 6629/2010) es especialmente clarificadora cuando afirma lo siguiente:

“Repárese que la aplicación del apartado 4 del expresado artículo 103 precisa de la concurrencia de dos requisitos. De un lado, ha de concurrir una exigencia de índole objetiva: ha de dictarse un acto contrario a un pronunciamiento judicial; y, de otro, debe mediar otra exigencia de tipo teleológico: que la finalidad sea precisamente eludir el cumplimiento de la sentencia”.

En nuestro caso, no sólo sigue sin darse cumplimiento a la sentencia (eliminación de obstáculos para reponer el camino a su situación previa), sino que **se ha dictado un nuevo acto (Decreto de 8 de agosto de 2017)** que ha autorizado la instalación de nuevos obstáculos en el camino, y además dicha decisión se ha adoptado, de nuevo, sin dar traslado previo al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, todo ello con la evidente intención de eludir a toda costa el cumplimiento de la sentencia.

Debemos en este sentido volver a insistir en el contenido del **FD jurídico Tercero de la sentencia** dictada y cuya ejecución se solicita, que resulta esclarecedor y que **viene a exigir del Ayuntamiento de Meco, la CONSULTA PREVIA al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, antes de la adopción y ejecución de cualquier tipo de acuerdo sobre el citado camino entre ambas poblaciones, BAJO SANCIÓN DE INCURRIR EN OMISIÓN DE UN TRÁMITE ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO Y POR TANTO EN ACTUACIÓN MATERIAL CONSTITUTIVA DE VÍA DE HECHO Y NULA DE PLENO DERECHO.**

Se dan por tanto en el presente caso, todas las circunstancias necesarias, tanto el elemento objetivo (resolución administrativa contraria al fallo tanto en sus aspectos formales como materiales) como el elemento subjetivo (resolución administrativa dictada y ejecutada en pleno mes de agosto, antes de que el propio Juzgado se pronuncie sobre la correcta ejecución de la sentencia instada por esta parte en el mes

de junio, y que no sólo restringe o dificulta sino que impide totalmente la circulación de cualquier tipo de vehículo), tal y como acreditan los informes aportados a la ejecución, todo ello, precisamente, con la finalidad de eludir el correcto cumplimiento de la sentencia.

Es por ello que entiende esta parte que el **Decreto nº 1269/2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Meco de fecha 8 de agosto de 2017** debe ser declarado nulo y por ende las obras recientemente ejecutadas a su amparo, descritas en el presente escrito y en el informe acompañado al mismo.

Por lo expuesto,

SUPlico AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito en unión de sus documentos y sus copias, tenga por interpuesto **INCIDENTE DE EJECUCION** de la sentencia nº 562/2014, de fecha 17 de noviembre de 2014 y previos los trámites legales, dicten resolución por la que:

1.- Se declare la nulidad del Decreto nº 1269/2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Meco de fecha 8 de agosto de 2017, por considerar que dicha resolución administrativa es contraria a derecho, infringe el contenido de la **Sentencia nº 198/2016 de 9 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid** y trata de eludir los efectos de la misma.

2.- Condene, en consecuencia, al Ayuntamiento de Meco a reponer las obras ejecutadas en el camino y proceda a la reapertura al tráfico rodado del camino y a la restitución del mismo a la situación existente anterior a la actividad administrativa impugnada en el procedimiento del que trae causa la presente ejecución.

Todo ello con imposición de las costas generadas como consecuencia del presente incidente.

Por ser de Justicia que se pide en Madrid a 1 de septiembre de 2017.

LETRADO

PROCURADOR